

Redimensionamiento de una frontera largamente olvidada

Chiapas 1973-1993

*Diana Guillén**

RESUMEN

A pesar de su colindancia con tres países, en México todavía, al iniciar la década de los setenta, parecía predominar la idea de que la única frontera importante era la que nos separa de Estados Unidos. En el extremo sur, Chiapas constituía un territorio lejano al que siempre podía acudir en busca de recursos naturales y favores políticos, pero sobre el que no existía mayor interés por parte de las autoridades federales. Conforme se delinearon en el horizonte nuevas variables vinculadas tanto a la explotación petrolera e hidroeléctrica como a los conflictos centroamericanos y a los ajustes en el interior de la clase política nacional, el escenario se transformó y la entidad pasó del abandono al interés estratégico. El trabajo se centra en tales consideraciones y busca comprobar que, a principios de los noventa, la relación entre las esferas de gobierno federal y estatal se había ya modificado.

Palabras clave: 1. poder, 2. historia, 3. frontera, 4. México, 5. Chiapas.

ABSTRACT

Despite Mexico sharing borders with three other countries, as recently as the beginning of the 1970s, there still predominated the idea that the only important border was the one with the United States. Chiapas, at the southern end of Mexico, constituted a territory apart, to which one could always turn in search of natural resources and political favors, but about which federal officials had little interest. As new variables appeared on the horizon—connected to both petroleum and hydroelectric exploitation and the Central American conflicts, as well as to the adjustments within the Mexico's political class—the scene began to alter, and the region went from abandonment to being of strategic interest. This work focuses on these considerations, and it seeks to prove that, by the beginning of the 1990s, the relationship between the federal and the state government spheres had already changed.

Keywords: 1. power, 2. history, 3. border, 4. Mexico, 5. Chiapas.

*Investigadora del Instituto Mora. Dirección electrónica: dianis@servidor.unam.mx.

Artículo recibido el 1 de octubre de 2002.

Artículo aceptado el 11 de abril de 2003.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia de México, el papel de Chiapas dentro del pacto federal ha variado. Desde su controvertida integración al territorio nacional hasta la emergencia de un movimiento armado que la puso en las primeras planas nacionales e internacionales, la entidad ha pasado del abandono al interés estratégico.

Entre uno y otro punto del camino hay algo más que el desafío lanzado en los primeros minutos de 1994: la aparición del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) potenció la necesidad de replantear los términos de un intercambio político cuyos límites se habían manifestado tiempo atrás. Ya durante la década de los setenta, los festejos por los 150 años de la mexicanidad chiapaneca evidenciaron nuevos matices en la mirada que desde el centro del país se tenía con respecto al sur. Programas destinados a la zona y frases publicitarias sobre la pertenencia del ámbito estatal al nacional resultan sintomáticos del proceso que paulatinamente reduciría los márgenes de acción del primero con respecto al segundo.

Si bien, en un sentido físico, el lugar que ocupaba Chiapas dentro del mapa federal seguía siendo el mismo, su acervo de recursos energéticos tendía a reposicionarla. Las facturas de una lejanía que en momentos anteriores había beneficiado tanto a las elites locales como a las centrales, se volvieron más onerosas para estas últimas y resultó difícil continuar desentendiéndose de un territorio que, además de proveer de insumos agrarios y solidaridades políticas (caudal de votos incluido), concentraba yacimientos petrolíferos y ventajas hidroeléctricas.

El escenario bélico que se extendía por suelo centroamericano agudizó los riesgos de mantener el aislamiento. La guerra en sí misma y posteriormente los miles de vidas que trastocó y obligó a buscar refugio en Chiapas contribuyeron también a ese tránsito hacia un mayor control sobre la entidad. Finalmente, a raíz de los ajustes en el interior de la clase política nacional y del ascenso de la llamada tecnocracia a los principales puestos de gobierno, se profundizó la tensión entre estructuras y mecanismos empleados para reproducir un orden basado en sociabilidades de tipo tradicional y propuestas modernizadoras con las que se pretendía colocar a México en el primer mundo.

Las reflexiones que a continuación se presentan parten de esos reacomodos en el acuerdo tácito que durante décadas había permitido la convivencia de grupos cuyo poder derivaba de procesos antagónicos (el porfiriato para los chiapanecos y la revolución para quienes capitalizaron la gesta y establecieron

su hegemonía en el plano federal). Interesa, sobre todo, una línea temporal que abarca las décadas de los setenta, ochenta e inicios de los noventa y se busca comprobar que durante ese lapso los elementos coyunturales brevemente señalados, conjugados con factores de larga data, transformaron el tipo de vínculos que se habían establecido entre las dos esferas territoriales de poder.

IDENTIDADES Y ALTERIDADES CON EL PODER CENTRAL

Cuando se afirma que el destino de Chiapas durante el siglo xx dependió de una elite política integrada por redes familiares estrechas, no se incorpora nada nuevo al análisis. Ya antes de que los reflectores se volvieran hacia la entidad, se había extendido el término *familia chiapaneca*, referido a los integrantes de esa elite.¹

Para acuñar el concepto y utilizarlo bastaba echar una hojeada a los nombres de quienes habían ocupado puestos públicos en los planos local, estatal y federal. De inmediato sobresalían ciertos apellidos que tendían a repetirse, evidenciando una tendencia a concentrar el poder que, a lo largo de la historia, ha sido compartida por sociedades de diversos tipos y ha motivado múltiples reflexiones teóricas² y empíricas.³ El peso de los hechos llevaba a construir hipótesis y a adoptar supuestos basados en la existencia de un grupo con escasos márgenes de circulación interna, que se había conformado a partir de relaciones sociales de corte oligárquico y que utilizaba su acceso al ámbito público con fines privados.

La veracidad de esta idea se sustentó, durante mucho tiempo, en observaciones directas y en referentes colectivos utilizados indistintamente de forma popular-coloquial, o bien como parte del análisis académico. Nuevos datos provenientes de trabajos rigurosos y sistemáticos han mostrado su contundencia y han facilitado la labor de identificar e interpretar a la élite chiapaneca (París, 1997; Gall, 1998). Tal vez el detalle de los intercambios (materiales y subjetivos) que se tradujeron en la hegemonía de sus integrantes todavía escape a nuestros alcances; sin embargo, las pistas hasta ahora reunidas son suficientes para mostrar el carácter endogámico del grupo, rescatar parte de su dinámica interna y

¹Quizá los dos textos en los que mejor se ha descrito el surgimiento y desarrollo de la familia chiapaneca sean los de Benjamin (1989) y García de León (1985).

²Un acercamiento sintético a la obra de los tres grandes teóricos de las elites (Wilfredo Pareto, Gaetano Mosca y Robert Michels) puede encontrarse en Pizzorno (1984).

³Para el caso de México destacan los trabajos de Camp (1979 y 1982) y Smith (1977 y 1982).

establecer sus estrechos vínculos con una realidad en la que se confunden lo social, lo económico y lo político.

La familia chiapaneca nació amparada por el control sobre dos recursos centrales para la historia de la entidad: la tierra y los hombres. Sus distintas ramas compartieron, desde el inicio, rasgos estructurales, y aunque cada una de ellas posee referentes identitarios específicos (adscripciones regionales, inclusive), cuando ha sido necesario han predominado las coincidencias sobre las divergencias.

Si rastreamos sus orígenes, veremos que durante el porfiriato los grupos depositarios del poder local escenificaron un enroque. Hasta ese momento, los principales integrantes de la elite llevaban varios siglos asentados en San Cristóbal de las Casas, pero conforme las actividades productivas se extendieron a otras áreas (en especial los valles centrales), nuevos sectores buscaron acomodo en una estructura piramidal cuya punta se había reservado a quienes respaldaban históricamente sus niveles de *status* y prestigio.

Desde la perspectiva coleta, los recién llegados constituían un puñado de advenedizos que carecían de los méritos necesarios para competir por el liderazgo, pero los intereses arraigados en los valles centrales habían consolidado su posición a partir del apoyo recibido bajo la égida rabasista y terminarían por imponer su predominio, cambiando incluso la centralidad político-administrativa de la entidad al trasladar la sede de los poderes públicos a Tuxtla Gutiérrez (1892).

La historiografía ha tendido a identificar a los alteños con los conservadores, y a los habitantes de los valles, con los liberales. Ambas etiquetas corresponden, sobre todo, a la filiación que en ciertos momentos pudo haber existido con tales banderas en el plano nacional y a los matices en la mentalidad de quienes integran cada uno de los bandos (tradicional-cerrada y empresarial-progresista, respectivamente). En realidad, los aparentes antagonismos entre ambas fracciones no impedían que compartiesen principios similares en cuanto a lo que debería ser la sociedad chiapaneca.

Una de las metas de los grupos que han sido identificados con la corriente liberal era la apertura de espacios vedados para ellos y por eso sus críticas al modo de vida de la corriente opuesta no incluían un cuestionamiento a fondo de las relaciones de servidumbre o del tipo de organización y manera de funcionar de las haciendas. Sus ímpetus modernizadores estuvieron, desde el principio, acotados por el espíritu de ganancia, y cuando finalmente impusieron su hegemonía no dudaron en recurrir a los mismos mecanismos que por años habían utilizado sus contrincantes, a quienes por este motivo los liberales califi-

caron negativamente. Está comprobado que liberales y conservadores tendieron a asegurar el flujo de trabajo indígena hacia las haciendas, aun si ello significaba dejar atrás propuestas e incluso decretos que en otro momento habían apoyado (García de León, 1985:153-155; Wassertrom, 1983).

En el terreno de los hechos tampoco hubo discrepancias a propósito de la concentración del fundo. Acorde con el objetivo liberal de generar una nueva clase de pequeños propietarios capaz de integrarse a la agricultura de tipo capitalista, las tierras comunales se convirtieron en el blanco de una reforma agraria que a la larga se tradujo en el fortalecimiento de la gran propiedad. Si en un principio Emilio Rabasa confió plenamente en las bondades de su política y los resultados iniciales apoyaron su certidumbre (en 1910 el número de ranchos se había duplicado con respecto a 1890 y el promedio estatal en cuanto a la extensión de los fundos era mucho menor que el nacional), cinco lustros después admitiría su error. Era ya demasiado tarde: las comunidades perdieron independencia conforme ranchos y haciendas crecían y el latifundio se consolidó por igual entre hacendados con mentalidad empresarial y hacendados con mentalidad tradicional (Benjamin, 1984:48-50).

El estallido revolucionario de 1910 poco afectó rivalidades y equilibrios existentes entre las fuerzas locales; en la cúspide se siguieron librando batallas encaminadas a establecer y (o) consolidar los controles sobre una sociedad cuya base sufría niveles de explotación denunciados desde tiempo atrás en la ciudad de México.⁴ En este sentido, mientras otros puntos del país atestiguaban el ocaso del porfiriato y participaban en su caída, los chiapanecos se enfrascaron en una guerra interna originada por las discrepancias existentes en torno a la sede de la capital (1911).

Los postulados maderistas se retomaban sólo cuando servían para combatir al enemigo interno, pero ninguno de los dos bandos involucrados en la disputa por cuotas de poder en el estado buscaba cambiar estructuras que se habían construido y (o) fortalecido al amparo de la dictadura porfirista (Guillén, 1994). La movilización social iniciada en el centro y norte del país correspondía a una realidad que distaba mucho de la chiapaneca, de allí que en el estado se aprovechase una posición geográfica que por años lo había hundido en el abandono y se hiciera uso de la lejanía física para mantenerse al margen de la revolución que se iniciaba.

⁴Dos documentos de la época que resultan interesantes para ilustrar la situación en la que se encontraba la fuerza de trabajo chiapaneca a fines del siglo XIX e inicios del XX son: Pola (1985) y Salazar (1910).

Más de un gobernador cambió conforme Francisco I. Madero ascendía a la presidencia de la república y posteriormente era derrocado por Victoriano Huerta; sin embargo, los ejes que hasta ese momento habían dominado la escena local prácticamente no se modificaron. La relativa autonomía de la que parecía gozar Chiapas se vio alterada a partir de 1914, cuando el general Jesús Agustín Castro llegó a la entidad con la representación de Venustiano Carranza.

La presencia de Castro acortaba la distancia física que había mantenido al estado al margen del proceso revolucionario y promovía transformaciones del *statu quo* vigente. El ala radical del carrancismo intentó llevar a la práctica medidas que, entre otras cosas, minaban uno de los pilares sobre los que la oligarquía asentaba su poder: la fuerza de trabajo servil.⁵ Los perjudicados acusaron recibo del conato de golpe recibido (en los hechos, los preceptos revolucionarios no llegaron a implantarse cabalmente) y se levantaron en armas para defender tanto las estructuras que les habían permitido encumbrarse como lo que suponían su derecho a conservar una independencia que la desatención del centro había propiciado.

Por primera vez las diferencias regionales se hicieron a un lado y el rechazo a la avanzada militar con la que el constitucionalismo buscaba ganar espacios en la frontera sur se convirtió en asunto de supervivencia para las diversas fracciones de la elite. Se inició entonces el *movimiento mapache* (a sus integrantes se les conocía con este nombre porque operaban de noche y comían maíz crudo en los campos). Al paso de los meses, nuevos elementos provenientes de los estratos inferiores de la organización social se incorporaron a él siguiendo a sus amos y haciendo crecer el radio de influencia de los sublevados.

Sin profundizar en el detalle de los procesos que se sucedieron en la entidad entre 1914 y 1919,⁶ vale la pena recordar que, durante ese lapso, el mapachismo se dedicó a bloquear cualquier intento de Castro y de sus sucesores de transformar la organización social chiapaneca. Mientras tanto, el carrancismo debía librar sus propias batallas en el plano federal, y cuando finalmente las fuerzas que se oponían a él lograron imponerse, los enemigos chiapanecos del llamado

⁵Jesús Agustín Castro había nacido en el norte del país (en una zona urbana e industrial) y, después de haber desempeñado varios trabajos, se incorporó al maderismo en 1910 y al carrancismo en 1913 y 1914. Su trayectoria lo había acercado a los oprimidos y sus ideas lo ubicaban en el bando radical del constitucionalismo (véase Knight, 1986:236-240).

⁶Varios trabajos de carácter histórico en los que se rescata este período han sido sintetizados en Pérez y Guillén (1994:232-242).

primer jefe de la revolución encontraron el terreno propicio para establecer una alianza que les permitiría mantener los privilegios por los que habían luchado a lo largo de un quinquenio.

El ascenso de Álvaro Obregón a la presidencia de la república favoreció, en la entidad, la permanencia de los sectores vinculados con el porfirismo. A diferencia de lo sucedido en otras partes, la revolución iniciada en 1910, lejos de destruir las estructuras oligárquicas, cobijó a las elites que las representaban. La familia revolucionaria se encargó de asegurar autonomía a la familia chiapaneca y a cambio recibió lealtad y recursos en abundancia. Aunque un acuerdo de esta naturaleza difícilmente podría haberse formalizado en algún documento, la historia se encargó de comprobar su vigencia por lo menos hasta la década de los setenta del siglo pasado.

Para los grupos de poder locales, el pacto significó la posibilidad de refuncionalizar relaciones caducas: por una parte, más de 60 años de una revolución social que se vanagloriaba de haber sido la primera del siglo xx y, por otra, el paisaje predominantemente rural de Chiapas seguía mostrando concentración fundiaria, peones acasillados, tiendas de raya, discriminación del indio y subordinación *ad infinitum* hacia *amos* con capacidad similar a la de antaño para controlar la vida de sus sirvientes.⁷

La esencia de este esquema se ha prolongado incluso hasta nuestros días, pero durante los últimos tres decenios ha dado muestras de agotamiento. Con base en tal idea se propone que en un tiempo corto empezó a gestarse mientras formas sociales (que de acuerdo con el discurso oficial ya habían sido superadas) se erosionaban y encontraban cada vez mayores dificultades para reproducirse. Los 20 años que corrieron en Chiapas entre 1973 y 1993 estuvieron impregnados de problemas que se arrastraban desde el porfiriato y a los que se sumaban conflictos derivados de una nueva etapa de las vidas estatal y nacional.

¿TODO EN CHIAPAS ES MÉXICO?

A estas alturas se ha diluido la imagen de una *familia chiapaneca* con la independencia necesaria para manejar *sus* asuntos (entendidas las esferas pública y pri-

⁷Un análisis más detallado de los fundamentos, trayectoria histórica y perfil actual de las elites chiapanecas puede consultarse en Guillén (2001), y para datos precisos sobre los personajes que las conforman véase Flores (2002).

vada como parte de éstos) y a la que, a pesar de los virajes sexenales, la federación permitía, e incluso solapaba, utilizar mecanismos de control más cercanos a los cuadros costumbristas del porfiriato que a la dimensión mítica construida alrededor del México posrevolucionario.

A partir de los años setenta, la efervescencia social interna creció y se modificó el acuerdo (lealtad y recursos a cambio de autonomía) que desde la etapa posrevolucionaria regía la inserción de Chiapas en el pacto federal. El ascenso de Luis Echeverría a la presidencia de la república evidenció el desfase entre una pretendida modernización agraria y la pervivencia de formas productivas tradicionales, y entre un discurso de apertura que invitaba a la participación ciudadana y las prácticas locales que la limitaban.

Aquí conviene recordar que el perfil de la entidad era eminentemente rural⁸ y que los sectores agropecuario y silvícola concentraban a la mayoría de la población económicamente activa (PEA),⁹ la cual tendía a integrarse en redes informales de producción e intercambio.

El desigual desarrollo de la agricultura explica que algunos polos empresariales que contaban con fuertes inversiones de capital y recurrían a insumos industriales (semillas mejoradas, fertilizantes, pesticidas, maquinaria, etcétera) coexistieran con formas mayoritarias de cultivo, por lo general dispersas, basadas en el minifundio, en las que persistían técnicas de producción provenientes de épocas precolombinas o de la colonia y donde la base fundamental para una producción de autoconsumo era la familia (Leguizamo, 1982:33).

Poco más de 90% de la superficie sembrada y cosechada estaba compuesta por tierras de temporal (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Gobierno del Estado de Chiapas, 1992:198-200) y, con matices regionales, persistían serios problemas alrededor de la propiedad fundiaria. En la zona central se combinaba la alta densidad demográfica (en buena medida, asociada a las posibilidades que ofrecía para la agricultura y la ganadería) con la fuerte presencia indígena (de donde surgían los dueños originales del lugar) y con los intentos de extender los límites de las propiedades particulares (aun si la fronte-

⁸En 1980, la población rural estaba compuesta por 1 386 603 personas, mientras que la urbana ascendía a 710 209; en 1990, la población rural tenía 1 913 754 habitantes, y la urbana, 1 296 742 (Premiá, 1982:42; Secretaría de Programación y Presupuesto del Estado, 1992:164).

⁹En 1980, estos sectores constituían 70% de la PEA, y una década después, 58.3% (Premiá, 1982:168; Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Gobierno del Estado de Chiapas, 1992:106-107).

ra agrícola ya no podía estirarse), condiciones que en forma conjunta convertían al área en un verdadero *territorio en disputa*.

En esta zona destacaba el cultivo de granos básicos (maíz, frijol, arroz y café son quizá los más importantes) y el riego artificial tenía escasa significación. A raíz de la crisis agrícola que afectó a toda la república (Bartra, 1980; Barkin, s.f., 37-43) emergió un grupo empresarial dentro del que sobresalían los cafetaleros, que habían hecho la mayor inversión de capital. Además de ellos estaban los comerciantes, que acaparaban, a través de ciertos consorcios, buena parte de los granos producidos. Casas como la Yemen, Tacaná y San Roque contaban con instalaciones para procesar café y podían exportarlo directamente. En general, estas empresas enviaban a sus agentes a los centros de producción para ofrecer adelantos en dinero a cuenta de futuras cosechas, siempre cargando intereses y ofreciendo precios muy por debajo de los oficiales (Castillo y Hernández, 1980).

El fortalecimiento del sector empresarial en sus niveles de producción y comercialización no implicó que desaparecieran las fracciones tradicionales de la élite; estas últimas seguían dependiendo del control sobre extensiones importantes de terreno (pobladores incluidos), se dedicaban fundamentalmente a la ganadería, y tanto para hacer mejoras materiales en esta actividad como para defender sus intereses económicos y políticos se organizaban en asociaciones que les permitían ejercer presión en los ámbitos estatal y nacional (Castillo y Hernández, 1980).

En un nivel inferior estaban ubicados los intermediarios, que servían de enlace entre el productor directo y el comerciante. En general, este grupo establecía relaciones amistosas con los campesinos y, para llevar adelante su tarea, se aprovechaba de las condiciones desiguales que privaban en el mercado de granos. En este mismo rango se encontraban los llamados campesinos medios, que se repartían en los diferentes ejidos y producían, sobre todo, granos básicos. Sus ganancias aumentaban conforme introducían nueva tecnología en la producción, ya que, además de incrementar la eficiencia, obtenían ingresos extras rentando la maquinaria a otros agricultores que no la poseían. Se trataba de un grupo pequeño frente al alto número de jornaleros que ocupaban la parte baja de la clase campesina (Castillo y Hernández, 1980).

Si bien el paisaje agrario sumariamente descrito corresponde al área central, buena parte de las características reseñadas se extendían a otras zonas de Chiapas. Entre las variantes de este paisaje podrían mencionarse las plantaciones cafeta-

leras del Soconusco,¹⁰ las cuales, en términos generales, escenificaron menos conflictos por la propiedad de la tierra y establecieron relaciones salariales.

La producción modernizada del Soconusco contrastaba, en apariencia, con la hacienda tradicional de otras partes de Chiapas, pero una y otra habían construido puentes que no permiten tratarlas como realidades ajenas. El enganche (con todo y su esencia extraeconómica) jugaba un papel importante para asegurar el flujo de trabajadores, los cuales, sobre todo durante los cuatro meses de pizca, resultaban imprescindibles para cultivar los cafetos. Asimismo, reforzaba los vínculos entre dos universos aparentemente desconectados: las comunidades indígenas del centro¹¹ y la producción cafetalera para el mercado exterior.¹²

Otros matices del paisaje campesino podían encontrarse en la zona norte de la entidad, donde también predominaba el cultivo del café, pero la importancia comercial del grano había significado el desplazamiento de productos como el maíz, el frijol, la calabaza y la yuca, los cuales, al igual que la cría de puercos de engorda y gallinas, servían de base para el consumo familiar. La economía de subsistencia había perdido terreno y muchas de las comunidades optaron por dedicarse a cultivar el grano en condiciones de minifundio, sin la asistencia técnica adecuada y con los instrumentos de trabajo mínimos, situación que los colocaba en clara desventaja con respecto a los grandes propietarios (Pontigo y Hernández, s.f.; León, 1976).

En la medida en la que las fincas cafetaleras se fueron extendiendo, los indígenas se incorporaron a ellas¹³ y todavía, en la década de los ochenta, los peones acasillados que vivían permanentemente en su interior recibían por su trabajo (cortar café, cuidar ganado, etcétera) salarios de entre 30 y 50 pesos, y como

¹⁰Un porcentaje importante del café exportado por Chiapas provenía del Soconusco: de los 2 040 211 y 2 428 723 quintales producidos, respectivamente, en 1990-1991 y 1991-1992, el Soconusco aportó 881 529 y 863 981 quintales en estos ciclos (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Gobierno del Estado de Chiapas, 1992:205-206).

¹¹Si bien no existen datos precisos sobre la cantidad de trabajadores que se trasladaban a la zona, resulta ilustrativo que en 1975 se calculase que arribaban procedentes de los Altos cerca de 10 000 (registrados en la Dirección de Asuntos Indígenas del gobierno del estado), más otra cantidad igual que iban por su cuenta y sin pasar por el enganche tradicional (Castillo y Pohlenz, pp. 7-8).

¹²Este vínculo no sólo era importante para las plantaciones del Soconusco; la pervivencia de comunidades que no parecían representar lugares de especial interés productivo tenía que ver, en buena medida, con necesidades externas de fuerza de trabajo (Tejera, 1988:98).

¹³Armando García Chiang ofrece un buen análisis de las características de la producción cafetalera en el municipio de Amatlán. Muchas de las reflexiones que allí se plantean trascienden el nivel casuístico y son útiles para acercarse a la zona norte de Chiapas (García, 1995).

complemento de este ingreso monetario se les concedían pequeñas parcelas para milpa y se les permitía tener animales domésticos.

Además de obligarse a trabajar para el patrón, este grupo debía entregar parte de la cosecha a precios muy bajos y los fines de semana realizaba labores gratuitas en la casa del *señor*. Después de haber vendido por poco dinero sus productos (maíz, frijol, aves de corral), los campesinos compraban algunos aperos agrícolas, vestimenta, bienes básicos (jabón, aceite, azúcar, etcétera) en tiendas similares a las de raya del porfiriato y contraían mayores deudas con el dueño de la finca (Pontigo, s.f.:82-83).

Se trataba de mecanismos diferenciadores y de control vinculados con la propiedad de la tierra, pero la creciente polarización de la sociedad local no se desarrolló sólo a partir de ellos. Los campesinos de la zona se encontraban también bajo el dominio de los comerciantes, cuya importancia había crecido a la par del desarrollo de cultivos como el tabaco, la caña de azúcar, el hule o caucho y, sobre todo, el café y el ganado vacuno.¹⁴

Finalmente, en lo que se refiere a la selva, podría decirse que se trataba de un territorio propicio para la inmigración, ya que a pesar de ocupar 24% del total de la entidad—17 540.6 kilómetros cuadrados— (Premiá, 1982:93-94), buena parte de su extensión permanecía deshabitada.¹⁵ Choles, tzeltales, tzotziles, y tojolabales que buscaban una alternativa ante la carencia de tierras de la zona central, se enfilaron hacia allá e iniciaron un proceso de colonización espontáneo y anárquico al que posteriormente contribuyeron los desmontes y quemas de los empresarios ganaderos y madereros. El traslado masivo de indígenas se reflejó en una serie de conflictos interétnicos, propiciados y (o) agudizados por la política oficial de *repartir* más de una vez el mismo terreno.¹⁶

Tales son, a mi parecer, las principales pistas para dilucidar el tipo de relaciones que privaban en el agro chiapaneco cuando el régimen de Echeverría impulsó un discurso modernizador que privilegiaba el fortalecimiento de los organismos oficiales. Secretarías como la de la Reforma Agraria (SRA) y de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH); organismos descentralizados como el

¹⁴Para una descripción más detallada de las actividades comerciales de la zona véase De la Peña, 1951:1007-1030.

¹⁵De acuerdo con el censo de 1990, la densidad de población de la zona era de 23 habitantes por kilómetro cuadrado, pero en su interior había disparidades tales como que en La Libertad se mencionaran sólo tres habitantes por kilómetro cuadrado, mientras en Yajalón fueran 202.

¹⁶Quizá el ejemplo más sonado de esta tendencia sea la dotación de 600 000 hectáreas a 66 jefes de familia lacandones a costa de más de 45 ejidos tzeltales y choles (Maza, 1977:38-39).

Instituto Nacional Indigenista (INI), la Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) o el Instituto Mexicano del Café (Inmecafe); instituciones de crédito como Banrural; y programas como el de Inversiones Públicas para el Desarrollo Rural (Pider) eran vistos como agentes capaces de romper los vicios que por décadas habían dificultado la obtención de financiamiento y la comercialización de los productos del campo (Marion, 1987:66-67).

Los circuitos productivos y comerciales continuaron, sin embargo, dependiendo de redes informales que favorecían el coyotaje y la usura. Con pequeñas variantes de acuerdo con el producto, las instituciones oficiales no lograron neutralizar las inercias descritas en los párrafos anteriores. En la zona central, por ejemplo, los principales beneficiados con el cultivo del arroz siguieron siendo los dueños de las bodegas, pues desde Veracruz venían los interesados a cargarlo directamente. El ganado se dirigía a otras partes de la entidad o fuera de ella (Puebla, Veracruz, Campeche y Tabasco eran los principales destinos del ganado para repasto, y el Distrito Federal y algunos municipios internos lo recibían para el abasto). La leche encontraba un buen canal de comercialización en la Compañía Nestlé y en la población local. En lo que se refiere al café, se aprovechaba la necesidad de los campesinos de obtener dinero antes de que el grano estuviera listo para colocarse en el mercado y las dificultades que implicaba transportarlo a las bodegas oficiales, promoviendo su venta en el ejido o lugar de producción (Castillo y Hernández, 1980:20-21). En cuanto a la zona norte, los programas oficiales tendieron a incorporar a los comerciantes más que a suprimirlos (Pontigo y Hernández, s.f.:7).

Ahora bien, con todo y sus limitaciones, las directrices enviadas desde el centro alteraron la balanza de fuerzas locales y contribuyeron a remover viejos descontentos. En medio de demandas de apertura política y de una crisis agrícola que rebasaba al ámbito del estado, aparecieron pequeños resquicios en las duras tapias que controlaban a los campesinos.

En tal escenario, dos conmemoraciones ilustran el inicio simbólico de una etapa de replanteamientos: los 500 años del natalicio de fray Bartolomé de las Casas y los 150 años de la mexicanidad chiapaneca. Detrás de las celebraciones respectivas se dibujaban conflictos de carácter local y requerimientos nacionales que acabarían por contrarrestar la capacidad de refuncionalización del esquema social vigente y de los acuerdos foráneos que le inyectaban oxígeno.

Ambos festejos tuvieron lugar en 1974, y mientras el primero sirvió de marco para la organización de un congreso indígena que potenció la capacidad de

movilización de quienes día a día acumulaban demandas y guardaban descontentos de larga data (Morales, 1992), el segundo implicó el reconocimiento de que, a pesar de su abandono, Chiapas formaba parte del territorio mexicano.

A propósito de este último punto, que es el que las reflexiones aquí presentadas buscan resaltar, el informe presidencial de ese año mencionaba el viaje que los representantes de los tres poderes realizarían a Tuxtla Gutiérrez “para enaltecer la gran jornada de mexicanidad que cumplió el pueblo chiapaneco, hace 150 años, al decidir unir sus destinos a los del resto del país” (Presidencia de la República, 1974: párrafo 16). Asimismo, quienes conserven recuerdos de la época seguramente visualizarán la frase “¡Todo en Chiapas es México!”, que, acompañada por imágenes de las bellezas naturales propias de la entidad, daba publicidad también a la recuperación de un trozo de país al que se había mantenido en el olvido.

PETRÓLEO Y ELECTRICIDAD A GRAN EL

Vistos en retrospectiva, los esfuerzos por estrechar contactos iban más allá de discursos y actos publicitarios; tras sus bellezas naturales, Chiapas escondía una dote de mayor envergadura: petróleo para financiar los proyectos de desarrollo nacional y potencial hidroeléctrico para ejecutarlos. La explotación de ambos recursos opacaba otros atractivos y convertía a la zona en prioridad federal.

Impulsadas desde fuera, las dos industrias contribuyeron, dentro del estado, al crecimiento explosivo de la economía y a la transformación de la estructura sectorial, sobre todo a raíz del *boom* petrolero, que inició en 1977.¹⁷ Sin negar el impacto del que nos dan cuenta las cifras, habría que destacar los bajos niveles de integración regional que caracterizaron estas actividades y su incapacidad para retribuir a la población local los beneficios extraídos de su territorio.

Los organismos encargados de su funcionamiento dependían del ámbito federal y cual caballos de Troya se introducían y desbarataban entramados socia-

¹⁷El producto interno bruto (PIB) de Chiapas se incrementó de poco más de 36 000 millones de pesos en 1970, a casi 113 000 en 1980 (calculados a precios constantes de ese año), creciendo a una tasa promedio anual de 12%. En el mismo lapso, la contribución al PIB nacional pasó de 1.42% a 2.64%. En lo que se refiere a la estructura sectorial, en 1970, 50% de la población económicamente activa provenía del sector primario, y el secundario y terciario se distribuían en partes iguales el resto. En 1980, 58% se concentraba en el sector secundario, 25% en el terciario y 17% en el primario (Premiá, 1982:110).

les cuyos referentes locales y estatales tendían a perderse. Las demandas a las que respondían la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) poco tenían que ver con las necesidades y el sentir de la gente que habitaba terrenos de *interés nacional*.¹⁸

Baste recordar que al construir las presas quedaron bajo el agua miles de hectáreas y otras tantas fueron inutilizadas. Un buen número de quienes allí moraban se vieron forzados a buscar acomodo en asentamientos irregulares de zonas urbanas y (o) a convertirse en solicitantes agregados de tierra, sin que los gobiernos federal y estatal pudiesen resolverles el problema de manera adecuada.¹⁹ La migración como consecuencia de las obras emprendidas alrededor de los proyectos hidroeléctricos no se limitó a la expulsión de quienes perdieron su tierra: paralelamente se abrieron posibilidades de empleo que, de manera temporal, atrajeron fuerza de trabajo, pero que al cerrarse una vez concluidas las presas dejaron sin ingreso y con escasas oportunidades de reinsertarse en actividades agropecuarias a un número importante de personas.

Aunque la explotación de petróleo dañó menos terreno de manera directa (indirectamente contaminó agua, pastizales y cultivos), el arribo de Pemex generó fenómenos inflacionarios que propiciaron, por un lado, el desplazamiento de quienes no pudieron sostener el nuevo ritmo de vida —aproximadamente 50 000 personas tuvieron que buscar otras tierras para asentarse— (Rodríguez, 1989:143) y, por otro, presiones sobre la vivienda, los servicios básicos y el empleo (Flores, 1984:6). Alrededor de Pemex se generaron relaciones de poder que no respondían a las lógicas locales y se movilizaron recursos económicos y oportunidades de empleo que llegaban a sobrepasar la capacidad de los gobiernos estatal y municipal (Michel, 1978:691-709).

Un buen ejemplo de los cambios sufridos es el municipio de Reforma: entre 1972 (año en el que se inició la perforación de pozos) y 1974, la explosión demográfica significó el paso de 3 000 habitantes a 17 630 (cabe destacar que en 1960 eran apenas 1 800) y la existencia de una población flotante de 10 000

¹⁸“La industria petrolera es de utilidad pública prioritaria sobre cualquier aprovechamiento de la superficie y del subsuelo de los terrenos, incluso sobre la utilidad social de los ejidos o comunidades”, establecen las enmiendas legales que en 1977 eliminaron cualquier duda sobre la preeminencia de Pemex dentro de los territorios en los que hubiese la posibilidad de extraer petróleo (Salazar y Whizar, 1998:55-64).

¹⁹En 1970, el presidente informaba: “Una comisión intersecretarial edifica siete poblados con todos los servicios que requieran, a fin de alojar en ellos a las poblaciones que habrán de desplazarse con motivo de las obras del complejo hidroeléctrico La Angostura que se realiza en el estado de Chiapas” (Presidencia de la República, 1970: párrafo 337).

personas (González, 1974:6A). Algo similar sucedió en Tuxtla Gutiérrez con la construcción de las presas La Angostura y Chicoasén: mientras en 1970 había menos de 60 000 habitantes, y una familia compuesta por cinco individuos podía vivir con 50 pesos diarios, en 1979 eran ya 180 000 pobladores y la gente construía cabañas de madera para vivir porque 300 pesos al día no alcanzaban para pagar la renta (Garza, 1979:19A y 26A).

Además de expropiar y desalojar a comunidades enteras, de cambiar los usos originales de la tierra y de alterar las relaciones sociales, las actividades de la CFE y de Pemex implicaron la afluencia de trabajadores provenientes de otros puntos de la república. El ingreso temporal –y algunas veces definitivo– de profesionistas, cuadros medios y empleados de menor rango provocó malestar entre los miembros de la elite tradicional²⁰ e impulsó la creación de zonas sobre las cuales la autoridad local tenía poca injerencia.²¹

La cara más amable de la explotación petrolera e hidroeléctrica no provenía, pues, del paisaje chiapaneco; el que pública y oficialmente se reconocieran las aportaciones de la entidad al pacto federal tampoco implicaba que los términos en que éste se planteaba le fuesen redituables. En medio de todo tipo de carencias,²² se profundizó el contraste entre lo que se daba y lo que se recibía; mientras amplios sectores de la población viviesen en condiciones miserables y las inversiones en infraestructura estuviesen destinadas a facilitar las labores dirigidas desde el centro,²³ brillaban por su ausencia las ventajas de que Luis Echeverría ponderara en sus informes de gobierno las riquezas naturales del estado.

A siglo y medio de haberse integrado a México, Chiapas había salido del olvido pero seguía dejada de la mano de Dios y del centro. Si bien la federación

²⁰Quejándose de los cambios que durante la década de los setenta se habían vivido, nos comentaban que “antes todo el mundo que se encontraba en el aeropuerto se conocía, mientras que ahora uno ya no sabe ni qué pata puso ese huevo” (entrevista a ganadera, Tuxtla Gutiérrez, marzo de 1990).

²¹En 1972 se denunciaba que el campamento levantado en Raudales de Malpaso para los trabajadores que construyeron la presa de Netzahualcóyotl, se había convertido en un pueblo sin ley. La población era de 5 403 habitantes, que vivían en casuchas de madera apiñadas en 173 lotes. Había 54 cantinas, dos lupanares, 160 prostitutas y cinco policías. La única autoridad era un juez que dependía de la cabecera municipal de Tecpatán, a 60 kilómetros del lugar, pero quienes poseían el monopolio de la cerveza eran los que controlaban los asuntos internos (Íñigo, 1972:14A).

²²De acuerdo con el censo de 1970, 43.27% de la población era analfabeta (casi 20 puntos por encima del porcentaje nacional); en la construcción de las viviendas predominaban los materiales poco resistentes y los pisos de tierra, y la mayoría carecía de servicios básicos.

²³Sólo para explotar los yacimientos de hidrocarburos de Chiapas y Tabasco, entre 1972 y 1976, el gobierno federal invirtió en la zona 5 000 millones de pesos (“Cuantiosa inversión para aprovechar la riqueza petrolera de Chiapas y Tabasco”, 1976:17A).

tenía razones para recordar el aniversario con bombos y platillos, en la entidad servía para refrendar relaciones de identidad ambiguas en las que convivían sentimientos de pertenencia con actitudes de reclamo.²⁴ Sin importar cuan caudalosos fuesen sus ríos ni cuan ricos sus mantos petroleros, se mantenían vigentes los cuestionamientos que con motivo del mismo acontecimiento histórico plantearon 62 años atrás los chiapanecos.

VECINOS EN GUERRA

Durante la década de los ochenta y principios de los noventa, el 14 de septiembre siguió siendo un día más en el calendario y los rezagos que aquejaban a Chiapas se profundizaron sin que el gobierno central tomase las medidas necesarias para revertirlos.²⁵ Nuevos elementos contribuyeron, sin embargo, a reposicionar a la entidad dentro del contexto federal: por un lado, el temor ante los saldos que podían dejar las guerras en las que se encontraban sumidos los vecinos del sur, y, por el otro, los cambios en el perfil de la elite política que había nacido al amparo de la revolución de 1910 y desde el centro del país había impuesto su hegemonía como abanderada de ese proceso.

²⁴“Finalmente nos hicieron caso y el nombre de Chiapas aparecía por todos lados, pero seguíamos siendo mexicanos de segunda clase”, fue la respuesta que se me dio al preguntar qué tanto habían cambiado las cosas para la entidad a partir de entonces (entrevista a Carlos Castañón Morel, Tuxtla Gutiérrez, marzo de 1990).

²⁵De acuerdo con el censo de 1990, el índice de analfabetismo registrado en la población chiapaneca de 15 años o más era el más alto del país (30.1%). En términos regionales, los índices mayores (47.58%) se concentraban en las comunidades indígenas de los Altos, seguidas de la selva (46.78%), norte (37.38%) y frontera (31.31%); las demás regiones estaban por debajo del promedio estatal. Los niños (entre seis y 14 años) que no sabían leer ni escribir constituían 35.9% y el rezago educativo más alto se daba en la selva (36.3%), el norte (33.8%) y los Altos (31.3%). En lo que se refiere a los servicios básicos, 42.7% de la población carecía de agua entubada, 38.5% no tenía acceso al drenaje (conectado a la calle, a fosa séptica o con desagüe al suelo, a un río o lago) y 35.9% no contaba con electricidad. Respecto a las viviendas, sólo 14.1% de ellas contaban con techo de materiales resistentes (losas de concreto, tabique o ladrillo), 37.1% estaban construidas con materiales durables (tabiques, ladrillo, bloque o piedra) y 48.7% tenían pisos de tierra (Secretaría de Programación y Presupuesto, 1992:371-408). Además de los datos que se desprenden de las estadísticas, la marginalidad aparecía a cada momento en una vida cotidiana impregnada de miseria e invadida por enfermedades (“Fracasan los programas de salud para frenar el cólera en Chiapas, admiten”, 1992; “Desnutrición y ceguera flagelan a 17 comunidades en los Altos de Chiapas”, 1992; “Aumentan en la frontera sur los casos de diarrea, sida y paludismo, dicen”, 1992; “Seguirá sin servicios de salud el 20% de los indígenas en Chiapas”, 1992; “Chiapas, primer lugar en enfermedades diarreicas”, 1993).

Conforme se recrudecían los problemas centroamericanos se hizo presente, en todas sus dimensiones, el carácter fronterizo de municipios que se habían acostumbrado a una línea divisoria con poca incidencia sobre la cotidianidad de sus habitantes.²⁶ Hasta ese momento, los límites políticos no habían logrado romper la continuidad de un paisaje delineado por siglos previos de historia común y en el que los vínculos incluían desde relaciones consanguíneas entre pobladores hasta imbricados tejidos comerciales y productivos, pasando por la unidad cultural de la región.

Al tratarse de construcciones de largo plazo, su núcleo duro no iba a deshacerse de la noche a la mañana, pero tampoco pasaron inadvertidos los esfuerzos por definir contornos precisos que estableciesen dónde empezaba y dónde terminaba México y, sobre todo, el verde olivo que empezó a impregnar un paisaje en el que hasta ese momento los militares ocupaban lugares secundarios.

En 1981, José López Portillo hablaba de Centroamérica como “zona convertida en frontera”, de la que nuestro país aún quedaba excluido y, un año más tarde, cuando el ingreso masivo de refugiados puso de relieve las implicaciones de una vecindad durante tanto tiempo relegada, Miguel de la Madrid, además de declarar que México era un “país frontera”, señaló en su campaña electoral: “No creo que podamos alejarnos de los problemas de Centroamérica. La geografía nos ha hecho vecinos y físicamente es imposible alejarnos de los problemas de Centroamérica” (Secretaría de la Presidencia, 1982).

La idea era desactivar, antes siquiera de que tomase forma, la posibilidad de que el conflicto ístmico se extendiese a suelo mexicano. A partir de un concepto de seguridad nacional disímil del que en otro momento había guiado los golpes militares extendidos por buena parte del cono sur y a contracorriente de las acciones que sobre la marcha se impulsaron para la región, en el plano discursivo, el gobierno central resaltó la vigencia de un régimen de garantías y la realización de objetivos sociales para sustentar la seguridad de la nación en la fortaleza de las instituciones públicas (Azuela, 1989:33-35).

²⁶Conviene recordar que los aproximadamente 962 kilómetros que conforman la frontera con Guatemala se extienden de manera diferenciada. Cuantitativamente hablando, Chiapas abarca 658.5 y concentra 16 de los 21 municipios fronterizos; Tabasco cuenta con 112 kilómetros, Campeche con 166.8 y Quintana Roo con 24.7. En términos cualitativos podría decirse que, de los cuatro estados, Chiapas es el que sostiene la relación fronteriza más intensa, sobre todo en zonas como el Soconusco (Coordinación General de Estadística, Geografía e Informática, s.f.).

Las discrepancias entre discurso y realidad hacen pensar que las medidas tomadas para incidir en esta última estaban fuertemente influidas por la visión estadounidense de un mundo bipolar, dentro del cual debía impedirse a toda costa el ascenso enemigo. De acuerdo con la *teoría del dominó*, para nuestros vecinos del norte era inadmisibles que nuestros vecinos del sur cambiaran de bloque y, en consecuencia, declararon una guerra de baja intensidad (Bermúdez, 1987); pero aún más grave sería que en el trayecto arrastraran a un país con el que los Estados Unidos colindan, de allí las presiones para que México endureciese su postura y adoptase estrategias enmarcadas en la doctrina de seguridad nacional que ellos mismos habían construido (Mussali, 2000; Suárez, 1977).

Se partía del supuesto de que los recursos nacionales (especialmente los recién descubiertos mantos petrolíferos) estaban en riesgo y había que defenderlos y, al mismo tiempo, se trataba de prevenir el posible influjo de los guerrilleros infiltrados —de acuerdo con esta visión— en los grupos que solicitaban refugio (Aguayo, 1990). Para ello se movilizaron numerosos contingentes militares. Si bien la presencia de estos últimos se multiplicó a partir de 1994, a finales de la década de los setenta era ya evidente (Cruz, 1982).

Por lo menos desde 1978 existía el proyecto de construir un eje carretero con aeropuertos paralelos, el cual rodearía los yacimientos petroleros, las presas, la selva y los Altos. Además de cumplir las funciones formalmente asignadas y que básicamente se centraban en el resguardo de la frontera, el ejército recurría a simulacros de lucha antiguerrillera y a despliegues de su potencial para amedrentar a la población. En Tila, Chilón, Bachajón, Tulijá, Yajalón y Ocosingo, los soldados organizaron ese año una representación en la que ellos, “los buenos”, “los amigos del pueblo”, derrotaban a sus enemigos ante el aplauso de los espectadores. De manera similar, San Cristóbal conmemoró el 450º aniversario de su fundación con un desfile en el que participaron 3 000 soldados de las zonas militares de Chiapas, Oaxaca y Guerrero (“Chiapas. Del simulacro a la dura realidad”, 1978:20-22).

A mediados de 1980 se denunciaban los atropellos que cometían las fuerzas públicas, encabezadas por el ejército, y se hablaba de entre 7 000 y 9 000 efectivos de este último (“Policías y tropas en Chiapas, al servicio de finqueros y comerciantes”, 1980:10-13). A fines de ese año se organizó un simulacro de guerra que involucraba a cinco estados del sureste (Yucatán, Chiapas, Quintana Roo, Tabasco y Campeche) y en el que participaron 43 705 hombres movilizados en un tiempo récord de 72 horas a lo largo de 2 000 kilómetros. El operati-

vo *Cactus Chicoasén* duró 15 días y demostró a los militares guatemaltecos (había ocho de ellos invitados) y a los habitantes de la zona la capacidad del ejército mexicano para aplastar al imaginario invasor rojo que venía de las Antillas y buscaba invadir y posesionarse de los yacimientos petroleros (Reyes, 1980).

Además del entonces presidente de la república (José López Portillo), presenciaron el *enfrentamiento final* los secretarios de la Defensa Nacional (Félix Galván López) y de Marina (Ricardo Cházaro Lara). Después de las últimas maniobras efectuadas en Escuintla, López Portillo comió con los soldados y declaró que el “Ejército Mexicano demuestra que con buena voluntad, imaginación y disciplina se pueden hacer maravillas” (Roldán, 1980:1, 19).

La guerra, como tal, difícilmente podía exportarse hacia México,²⁷ de allí que, en términos generales, la línea fronteriza llevase a buen término su misión y, a pesar de incursiones por momentos constantes y amenazadoras, los enfrentamientos tendieran a mantenerse al sur de ella. Las consecuencias de la situación bélica iban, sin embargo, más allá de la lucha armada: entre los efectos económicos y sociales que exportó a territorio mexicano destaca la afluencia masiva de individuos, familias e incluso comunidades enteras que huían ante la amenaza de que los enfrentamientos y la represión los alcanzasen. Además de impactar a la sociedad local, el tema de los refugiados se convirtió en asunto de interés nacional y favoreció la construcción de políticas de Estado que buscaban darle respuesta intersectando esferas territoriales y planos institucionales diversos.

En la medida en la que recursos y procesos que se desarrollaban en suelo chiapaneco pasaban a ser de incumbencia federal, los rangos de autonomía de la entidad se acortaban. Al mismo tiempo se tornaban más profundas tanto la contradicción entre estructuras de poder y prácticas sociales de tipo tradicional (refuncionalizadas, mas no eliminadas en el ámbito chiapaneco por la revolución de 1910) como la apertura democrática que, de manera siempre limitada y por lo general circunscrita en el nivel discursivo, se venía impulsando desde la época de Echeverría.²⁸

²⁷En contra de lo que postula la teoría del dominó, desde mi punto de vista, las movilizaciones sociales (se traduzcan o no en guerras) están lejos de constituir brotes epidémicos; cada una de ellas tiene raíces profundas que explican y dan sentido a su emergencia y que no pueden trasladarse mecánicamente a realidades disímiles.

²⁸Para un desarrollo más puntual de lo que esta contradicción implicaba en términos de la reproducción del orden interno, véase Guillén, 1988.

¿HACIA UN DESARROLLO INTEGRAL?

Durante la década de los ochenta, la necesidad de replantear los términos del intercambio establecido entre ambas esferas territoriales de poder era obvia. Además de los elementos ya apuntados, había variado el perfil de las elites surgidas en el plano federal. Los viejos políticos empezaron a ser desplazados por un grupo de jóvenes administradores (tecnócratas, de acuerdo con la jerga en boga) que descalificaban muchas de las medidas tomadas por sus antecesores. Desde el centro del país, las nuevas generaciones concebían un México que podía entrar de lleno en el primer mundo y, con esa mira en la mente, trataban de inocular gérmenes modernizantes, que resultaban letales para quienes, a lo largo de la historia, habían ocupado posiciones privilegiadas dentro de la sociedad chiapaneca (Guillén, 1988).

La corriente neoliberal se fue imponiendo a partir del sexenio de Miguel de la Madrid y buena parte de las prácticas sustentadas en el referente revolucionario a las que se había recurrido en el pasado fueron rechazadas. Se criticaban las aberraciones de programas sociales calificados de populistas y en nombre de criterios racionalizantes se trastocaban las reglas del juego para manejar el rubro al que elegantemente se bautizó con el nombre de *combate a la pobreza*. Habría que decir que desplazar a las viejas y anquilosadas formas de enfrentar injusticias sistémicas constituía un objetivo loable en sí mismo, pero, por desgracia, los conductos adecuados para sustituirlas no parecen haberse encontrado hasta la fecha.

Paralelamente a los recambios que se vivían en el interior de la familia revolucionaria, se acentuaron las repercusiones del conflicto centroamericano. En su segundo informe de gobierno, De la Madrid afirmaba: “México no puede ser indiferente a lo que ocurre a nuestros hermanos más próximos, la violencia que se ha instaurado en el área es una amenaza a nuestra seguridad” (Presidencia de la República, 1984:107).

Además de las acciones de política exterior en ese entonces adoptadas (recuérdese la participación de México en el grupo Contadora y su insistencia en un arreglo negociado de la paz), en la entidad se apuntaló la fuerza militar e incluso se nominó a un general de división (Absalón Castellanos Domínguez) como candidato priísta –y, por lo tanto, seguro triunfador– a la gubernatura.

La creciente pérdida de autonomía relativa que por la vía de los hechos presentaba la entidad, iba acompañada de un discurso oficial en el que se resaltaban las bondades de la descentralización. Como parte de esta última se promovía el *desarrollo integral* de los estados. Sin embargo, el problema era hacia

dónde dirigir este desarrollo. En la medida en la que los requerimientos nacionales tenían prioridad, las necesidades de las *regiones estratégicas* quedaban supeditadas y más que analizarlas y satisfacerlas desde una perspectiva interna, se buscaba resolverlas en función de sus implicaciones para el ámbito federal.

El *Plan Chiapas* se inscribía en esa lógica. Anunciado publicitariamente como el primer esfuerzo conjunto de los gobiernos nacional y estatal, abría la posibilidad de mostrar el interés que la federación tenía en la zona y, además, a través de él se aseguraba un desarrollo acorde con el proyecto de país que pretendía impulsarse.

El plan implicó una inversión pública (federal y estatal) sin precedente en la entidad; sus metas programáticas incluían resolver los problemas económicos, sociales y políticos que a ésta aquejaban,²⁹ pero en el fondo, su objetivo central era asegurar que los recursos chiapanecos (*vitales para la nación*) se explotasen de la mejor manera.

La llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia no modificó en lo sustancial este tipo de vínculos. Si bien los conflictos centroamericanos pasaron a segundo plano y el discurso del nuevo mandatario incorporó al narcotráfico como la principal amenaza contra la seguridad nacional (Suárez, 1977:95-96), parte del combate a éste se escenificaba en la frontera sur.

Por otro lado, el interés en la expansión comercial de México hacia América Latina incluía la vitalidad de esta frontera y el reforzamiento de su carácter simbólico como límite entre el desarrollo y el subdesarrollo. A pesar de que se le apoyara (“Se financiarán importaciones de Centroamérica a tasas preferenciales”, 1989:10) y se firmasen tratados para incrementar los intercambios,³⁰ Salinas buscó marcar las diferencias entre el sur y una América del Norte dentro de la que su proyecto pretendía ubicar a nuestro país.

²⁹Las líneas estratégicas que se proponían eran: 1). el desarrollo integral de Chiapas como expresión de la descentralización de la vida nacional; 2). dentro del nacionalismo revolucionario, reafirmar la integración de Chiapas al proyecto nacional de desarrollo; 3). para la sociedad igualitaria, disminuir inequidades así como garantizar derechos y elevar aceleradamente el nivel de los servicios en materia social; 4). para la democratización integral, fortalecer los sustentos institucionales del estado de derecho y su respeto por parte de las autoridades y de todas las fuerzas sociales, culturales y políticas; 5). para el desarrollo económico y social, regularizar la tenencia de la tierra en estricto apego al artículo 27 constitucional, preservar los recursos naturales y ampliar la base productiva del estado (*Plan Chiapas. Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas*, s.f., p. 7).

³⁰“Como resultado de la Cumbre de Tuxtla Gutiérrez, celebrada en 1991, suscribimos en agosto de este año, con los países centroamericanos, el Acuerdo Marco para el Programa de Liberalización Comercial. Profundizamos nuestras conversaciones sobre los temas comunes en esta región estratégica de nuestro país” (Presidencia de la República, 1992:8).

En tal sentido, el proceso de redimensionalización de la zona fronteriza se mantuvo y se insistió en que dentro de ella imperaban la identidad e historia mexicanas. El papel que se asignaba a Chiapas podría resumirse en la siguiente declaración de Patrocinio González Blanco:

La integración debe efectuarse de tal modo que Chiapas sea, en Centroamérica, una presencia mexicana. México no termina aquí, sino que aquí empieza. Nuestra mexicanidad tiene que ser vigorosa, sólida, democrática ante los centroamericanos, y congruente con los planteamientos que se postulan para la región (Reyes Nevares, 1989:8).

A fines de 1993 y después de dos décadas de reacomodos, la posición de Chiapas dentro del pacto federal había variado. Durante ese lapso, la porción cuantitativa y cualitativamente más importante de la frontera sur mexicana transitó del olvido a la puesta en marcha de planes y programas económica y geopolíticamente estratégicos para el país.³¹

A lo largo de esa década, otros elementos se delinearon en el horizonte: la emergencia de un movimiento armado en los primeros minutos de 1994 abrió a su vez una nueva etapa en el proceso de replanteamientos que a partir de los setenta había caracterizado a los flujos de intercambio con el centro del país. A los elementos analizados a lo largo de este trabajo, se sumaron las variables que durante los últimos años se han puesto en la mesa de discusiones, y temas como el de la autonomía local o el de la pertinencia de impulsar planes al estilo del Plan Puebla-Panamá (PPP) ocupan hoy por hoy un primer plano.

Más allá de las divergencias que pudiesen existir sobre la viabilidad y (o) conveniencia de responder positivamente a las demandas autonómicas, el que se hubiesen generado los espacios para plantearlas complica la agenda de pendientes en el camino hacia una plena inserción del territorio chiapaneco dentro del pacto federal.³²

³¹En este punto quizá convenga resaltar que ese reposicionamiento no alteró las bases poco equitativas del intercambio sostenido por Chiapas con el poder central. Si bien las formas de mirar hacia el sur desde el centro variaron, este último siguió sin respetar la soberanía de los chiapanecos sobre sus riquezas naturales y humanas y continuó tolerando que se les explotase y mantuviese sujetas con mecanismos propios del porfiriato. Se trata de un matiz importante, pues el saqueo de recursos (fundamentalmente petróleo y electricidad), el poco interés en las necesidades de la población (negligentemente paliadas con los programas destinados a la zona) y la incapacidad de los canales institucionales para dar cauce al descontento social abonaron elementos a un desgaste que finalmente desembocaría en enfrentamiento abierto.

³²Sugerentes acercamientos a los retos que han debido enfrentar las experiencias autonómicas chiapanecas y a las formas en que éstas se han traducido en una *reinención de los usos y costumbres*, pueden encontrarse en Mattiace, Hernández y Rus, 2002.

Hemos visto cómo los términos de este último se han ido modificando desde la década de los setenta y cómo ello ha significado una pérdida de soberanía interna que incluye el manejo de los recursos naturales con los que cuenta la entidad. El contexto no resulta, pues, favorable a solicitud alguna de autodeterminación, pero se vuelve todavía más adverso a ésta cuando la región involucrada produce petróleo, electricidad y forma parte de un entorno biodiverso sobre el que se ciernen múltiples intereses.

La oferta gubernamental para encarar tal escenario pasa por la puesta en marcha del PPP. En la medida en la que no se ha materializado resulta difícil medir sus implicaciones, pero con base en los discursos y documentos que ha generado y a partir de las pistas que nos ha dejado la historia reciente, se le define como un reordenamiento territorial derivado de necesidades económicas globales, incubado dentro de un contexto regionalmente pauperizado y que, entre otras cosas, incidirá en el futuro de la frontera sur mexicana.³³

La apuesta es colocar en el mercado transnacional atributos naturales y sociales atractivos para las grandes empresas, aunque ello signifique más costos que beneficios para la población. En el plano económico-social se privilegian los impulsos a la industria maquiladora y se supone que el paupérrimo nivel de vida de la gente mejorará al ser contratada como mano de obra barata, mientras que en el político se limitan las opciones para buscar la equidad en la relación con las comunidades indígenas y de antemano se desecha la posibilidad de valorar sus demandas de autonomía.

Frente a tal panorama no queda mucho por decir; sólo resta esperar que la realidad refute el poco optimismo de las consideraciones presentadas a lo largo de este trabajo y que los acuerdos que en el siglo XXI se construyan alrededor de éstos y otros nudos de conflicto ayuden a enterrar los vicios y abandonos que han acompañado el andar de la región.

BIBLIOGRAFÍA

- Aguayo Quezada, Sergio, *Chiapas: Las amenazas a la seguridad nacional*, México, Centro Latinoamericano de Estudios Estratégicos, 1987.
- , *En busca de la seguridad perdida: Aproximación a la seguridad nacional mexicana*, México, Siglo XXI, 1990.

³³Los antecedentes y posibles alcances del PPP pueden consultarse en Barreda, 2001.

- Azuela, Ernesto, "Cultura, política y frontera", en Hernández Palacios Luis y Juan Manuel Sandoval (comps.), *El redescubrimiento de la frontera sur, México, Ancien Regime*, Universidad Autónoma de Zacatecas y Universidad Autónoma Metropolitana, México, 1989.
- Barkin, David, "Nueva polémica agraria. México: Tres crisis alimentarias", *Nexos*, núm. 77, pp. 37-43
- Barreda Marín, Andrés, "Los peligros del Plan Puebla Panamá", *Mesoamérica, los ríos profundos. Alternativas al Plan Puebla-Panamá*, México, Instituto Maya, 2001.
- Bartra, Armando, "Crisis agraria y movimientos campesinos en los setenta", en *Cuadernos agrarios*, núms. 10 y 11, 1980.
- Bermúdez, Lilia, *Guerra de baja intensidad*, México, Siglo XXI, 1987.
- Benjamin, Thomas L., *A Rich Land a Poor People*, Albuquerque, University of New Mexico Press, 1989.
- Camp, Roderic Ai, *Los líderes políticos de México. Su educación y reclutamiento*, México, Fondo de Cultura Económica, 1979.
- , *Mexican Political Biographies 1935-1981*, Arizona, University of Arizona Press, 1982.
- Casillas, Rodolfo (comp.), *Los procesos migratorios centroamericanos y sus efectos regionales*, México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1992.
- Castillo Burguete, María Teresa y Gonzalo Hernández Díaz, *Campesinos, terratenientes y empresarios agrícolas en los valles centrales de Chiapas: Contribución al análisis de clase regional* (documento de circulación interna), Chiapas, Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, 1980.
- y Juan Pohlenz, *Fuerza de trabajo y producción agrícola en Soconusco, Chiapas* (documento de circulación interna), Chiapas, Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, s.f.
- Cruz, José Antonio, *Absalón Castellanos y terratenientes: Un análisis coyuntural*, Tuxtla Gutiérrez, Universidad Autónoma de Chiapas, 1982.
- Espinoza, Luis, "México y Chiapas de 1824 a 1912", en *Commemoración del LXXXVIII aniversario de la unión de Chiapas a México*, México, Imprenta de Adolfo Montes de Oca, 1912.
- Flores Vera, Juan Antonio, *Élites y modernización política en Chiapas*, tesis de doctorado, México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNAM, 2002.
- Freyermuth, Graciela y Rosalva Aída Hernández Castillo (comps.), *Una década de refugio en México. Los refugiados guatemaltecos y los derechos humanos*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social,

- Instituto Chiapaneco de Cultura y Academia Mexicana de Derechos Humanos, 1992.
- Gall, Olivia, “Los elementos histórico-estructurales del racismo en Chiapas”, en Castellanos Guerrero, Alicia y Juan Manuel Sandoval (coords.), *Nación, racismo e identidad*, México, Nuestro Tiempo, 1998 (colección Los Grandes Problemas Nacionales).
- García Chiang, Armando, “La reforma al artículo 27, los campesinos y sus organizaciones. El caso del municipio de Amatlán”, tesis de maestría, México, Instituto Mora, 1995.
- García de León, Antonio, *Resistencia y utopía. Memorial de agravios y crónica de revueltas y profecías acaecidas en la provincia de Chiapas durante los últimos quinientos años de su historia*, 2 vol., México, Era, 1985.
- Guillén, Diana, *Chiapas 1973-1993. Mediaciones, política e institucionalidad*, México, Instituto Mora, 1988.
- , *El maderismo en Chiapas. Matices regionales del acontecer revolucionario*, México, Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana, 1994 (col. Premio Salvador Azuela).
- , “¿Atisbos de una clase política?”, en Olivia Gall (coord.), *Chiapas: Sociedad, economía, interculturalidad y política*, México, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, UNAM, 2001.
- Juárez, Víctor Manuel, *Impactos socioeconómicos de los refugiados guatemaltecos en el estado de Chiapas*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, 1985.
- Knight, Allan, *The Mexican Revolution*, Cambridge, Cambridge University Press, 1986 (Cambridge University Studies, núm. 54).
- Leguizamo, Juan M. Mauricio, *La producción agrícola en Chiapas*, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, 1982.
- León López, Arturo, *Las comunidades indígenas y un cultivo comercial: El café (estudio de caso: Región chol del norte del estado de Chiapas)*, Facultad de Economía, UNAM, 1976.
- Marion Singer, Odile, “Pueblos en Chiapas: Una democracia a la defensiva”, *Revista mexicana de sociología*, vol. XLIX, núm. 4, 1987, pp. 37-73.
- Mattiace, Shannan L., Rosalva Aída Hernández y Jan Rus (editores), *Tierra, libertad y autonomía: Impactos regionales del zapatismo en Chiapas*, México, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, International Work Group for Indigenous Affairs, 2002.

- Michel, Marco A. y Leopoldo Allub, "Petróleo y cambio social en el sureste de México", *Foro internacional*, vol. XVIII, núm. 4, abril-junio de 1978.
- Morales Bermúdez, Jesús, "El Congreso Indígena de Chiapas: Un testimonio", *Anuario de cultura e investigación 1991*, Tuxtla Gutiérrez, Instituto Chiapaneco de Cultura, 1992.
- Mussali Galante, Rina, *El desencuentro americano: México y Estados Unidos en la globalización*, México, Instituto Mora, 2000.
- París Pombo, María Dolores, *Identidades colectivas de las élites en el centro de Chiapas (1971-1993): Tuxtla Gutiérrez y San Cristóbal de las Casas*, tesis de doctorado, México, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, 1997.
- Peña, Moisés de la, *Chiapas económico*, vol. IV, México, Departamento de Prensa y Turismo, Sección Autográfica, 1951.
- Pérez Salas, Ma. Esther y Diana Guillén, *Chiapas: Una historia compartida*, México, Instituto Mora, 1994.
- Pizzorno, Alessandro, "Sistema social y clase política", *Historia de las ideas políticas, económicas y sociales*, México, Folios, 1984.
- Pola, Ángel, "Los escándalos de la esclavitud en México. Chiapas. El mal y el remedio", *El socialista*, año XV, núms. 53-59, 1885.
- Pontigo, José Luis y Gonzalo Hernández D., *Poder y dominación en la zona norte de Chiapas* (documento de trabajo mecanografiado), México, Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste, s.f.
- Rodríguez de Ita, Guadalupe, "Una mirada al sur: Los refugiados guatemaltecos en Chiapas", en Guillén, Diana (coord.), *Chiapas: Rupturas y continuidades de una sociedad fragmentada*, México, Instituto Mora, 2003.
- Rodríguez, Erwin, "En torno a los hilos delgados de la frontera sur: La agudización de los problemas agrarios en Chiapas durante la década de los ochentas", en Hernández Palacios, Luis y Juan Manuel Sandoval (comps.), *El redescubrimiento de la frontera sur*, Universidad Autónoma de Zacatecas-Universidad Autónoma Metropolitana, 1989, p. 143.
- Salazar, Hilda y Silvia Whizar, "Participación ciudadana y petróleo", *El cotidiano*, núm. 91, septiembre-octubre de 1998.
- Salazar y Madrid, E., "El montero", *Chiapas y México. Revista ilustrada*, México, octubre de 1910.
- Smith, Peter, *Los laberintos del poder*, México, El Colegio de México, 1982.
- , "Does Mexico Have a Power Elite?", *Authoritarianism in Mexico*, Filadelfia, Institute for the Study of Human Issues, 1977.

- Suárez Trueba, Ana Paula, *Los refugiados y la definición de seguridad nacional en la frontera sur: El caso chiapaneco (1970-1994)*, tesis de licenciatura, ITAM, 1977.
- Tejera, Héctor, “Identidad y cuestión étnica, estudio en dos subregiones de Chiapas”, *Boletín de antropología americana*, núm. 17, México, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1988.
- Wassertrom, Robert, *Class and Society in Central Chiapas*, Berkeley, University of California Press, 1983.

Hemerografía

- “Aumentan en la frontera sur los casos de diarrea, sida y paludismo, dicen”, *El universal*, México, 8 de noviembre de 1992.
- “Cuantiosa inversión para aprovechar la riqueza petrolera de Chiapas y Tabasco”, *Excelsior*, México, 21 de noviembre de 1976.
- “Chiapas. Del simulacro a la dura realidad”, *Proceso*, México, 17 de abril de 1978.
- “Chiapas, primer lugar en enfermedades diarreicas”, *La jornada*, México, 21 de enero de 1993.
- “Desnutrición y ceguera flagelan a 17 comunidades en los Altos de Chiapas”, *El universal*, México, 12 de octubre de 1992.
- Flores Meneses, Amet, “Chiapas mantiene un gran atraso social pese a su gran aporte en energéticos”, *El día*, México, 17 de abril de 1984.
- “Fracasan los programas de salud para frenar el cólera en Chiapas, admiten”, *El universal*, México, 12 de agosto de 1992.
- Garza M., Antonio, “Inflación y carestía llevó a Tuxtla Gutiérrez la planta de Chicoasén”, *Excelsior*, México, 5 de diciembre de 1979.
- González, Silvestre, “Explosión demográfica y nuevos ricos en Chiapas”, *Excelsior*, México, 9 de diciembre de 1974.
- Íñigo, Alejandro, “Pueblo sin ley al lado de la presa Netzahualcóyotl”, *Excelsior*, México, 5 de mayo de 1972.
- Maza, Enrique, “Los derechos indígenas y el petróleo”, *Proceso*, México, 5 de diciembre de 1977.
- Payán, Víctor, “Reclama un grupo étnico el pago de café por \$5,000 millones en Chiapas”, *Excelsior*, 4 de diciembre de 1984.
- “Policías y tropas en Chiapas, al servicio de finqueros y comerciantes”, *Proceso*, México, 21 de julio de 1980.

- Reyes Fuentes, José Mario, “Ocho guatemaltecos, observadores de las maniobras del ejército mexicano contra el invasor antillano”, *Proceso*, México, 15 de diciembre de 1980.
- Reyes Nevares, Beatriz, “Chiapas debe ser la presencia mexicana en Centroamérica”, *El día*, México, 21 de septiembre de 1989.
- Roldán Valencia, Jorge, “Convivió JLP con los soldados que están en maniobras”, *El universal*, México, 10 de diciembre de 1980.
- “Se financiarán importaciones de Centroamérica a tasas preferenciales”, *El día*, México, 26 de agosto de 1989.
- “Seguirá sin servicios de salud el 20% de los indígenas en Chiapas”, *El universal*, México, 12 de noviembre de 1992.

Documentos oficiales

- Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, *Memoria. Presencia de los refugiados guatemaltecos en México*, México, 1999.
- Coordinación General de Estadística, Geografía e Informática, *Frontera sur, indicadores básicos, 1988*, México, s.f.
- Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y Gobierno del Estado de Chiapas, *Anuario estadístico de Chiapas*, Aguascalientes, 1992.
- Plan Chiapas. Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas*, s.l., s.e., s.f.
- Premiá, *Chiapas, plan y programas de gobierno, 1982-1988*, Puebla, 1982.
- Presidencia de la República, *Informe de gobierno que rinde Luis Echeverría Álvarez ante el H. Congreso de la Unión*, México, 1970.
- , *Informe de gobierno que rinde Luis Echeverría Álvarez ante el H. Congreso de la Unión*, México, 1973.
- , *Informe de gobierno que rinde Luis Echeverría Álvarez ante el H. Congreso de la Unión*, México, 1974.
- , *Informe de gobierno que rinde Luis Echeverría Álvarez ante el H. Congreso de la Unión*, México, 1975.
- , *Informe de gobierno que rinde Luis Echeverría Álvarez ante el H. Congreso de la Unión*, México, 1976.
- , *Segundo informe de gobierno que rinde ante el H. Congreso de la Unión Miguel de la Madrid Hurtado*, México, 1984.

———, *Tercer informe de gobierno que rinde ante el H. Congreso de la Unión Carlos Salinas de Gortari*, México, 1992.

Secretaría de la Presidencia, *Monografía del estado de Chiapas*, México, 1982.

Secretaría de Programación y Presupuesto, *Agenda estadística Chiapas 1992*, México, Gobierno Constitucional del Estado de Chiapas, 1992.

